



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: Ejecutivo Laboral
Ejecutante: NANCY PETRONA PACHECO PÉREZ
Accionada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -
Procedencia: Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín
Radicado n.º: 05001-31-05-015-2018-00766-01 (E2-22-339)
Decisión: Revoca

En Medellín, a los dieciséis (16) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022 y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA20-11567 del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE** y **VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante en contra del auto del 29 de agosto de 2022 mediante el cual se negó el embargo de una cuenta bancaria de Colpensiones, dentro del proceso ejecutivo laboral propuesto por **NANCY PETRONA PACHECO PÉREZ** en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, radicado bajo el n.º 05001-31-05-015-2018-00766-01 (E2-22-339).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala, y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda.

ANTECEDENTES

En torno de resolver la controversia planteada, cumple señalar que mediante auto de del 15 de enero de 2019 el juzgado de conocimiento libró mandamiento de pago por los siguientes conceptos (doc. 01 pág. 195 y ss.):

“(…)

- *Por las mesadas pensionales causadas a partir del 1 de septiembre de 2013, junto con los incrementos de Ley que se generen hasta la fecha de su pago.*
- *Por las mesadas adicionales (de diciembre) causadas a partir del año 2013, hasta la fecha de pago de la pensión.*
- *A indexar en el momento en que se proceda el pago de las mesadas adeudadas, la cantidad a que ascienda éstas, tomando para ello el valor del IPS certificado por el DANE, atendiendo la causación mensual de las mismas. (…)*”

Posteriormente, en audiencia pública del 2 de agosto de 2019 (doc. 01 pág. 224 y 225 y doc. 05) se declararon no probadas las excepciones de pago, compensación y prescripción, propuestas oportunamente por COLPENSIONES, y se ordenó seguir adelante con la ejecución.

Luego, a través de escrito presentado el 26 de agosto de 2022 (doc. 22), el apoderado judicial de la parte ejecutante solicitó “(…) *el embargo de los dineros de la Entidad ejecutada, que reposan en las (SIC) siguiente cuenta bancaria. Cuenta de Ahorros No 65283208570 de Bancolombia – Medellín, (…)*”, solicitud que fue negada mediante auto de 29 de agosto de 2022, asuntando la *a quo* al efecto que “(…) *se abstiene de embargar las cuentas que tiene Colpensiones en las diferentes entidades Bancarias con fundamento en varios informes rendidos por Colpensiones, tanto a este Despacho como a las entidades crediticias donde posee las cuentas bancarias, donde reiteran su inembargabilidad (…)*” (doc. 23). Contra la decisión, se interpuso el recurso de apelación (doc. 24), con fundamento en que:

“(…) *en tratándose del cumplimiento de sentencias judiciales, se está ante una situación que amerita una excepción al principio de inembargabilidad. (…)* *no obstante el levantamiento de la embargabilidad absoluta, (…)* *la entidad pública embargada está facultada para disponer que sean ciertos recursos en particular los que sean objeto de la medida para cumplir estas obligaciones, (…)* *La cuenta precitada es la que la Gerencia Nacional de Tesorería de Colpensiones autoriza para la aplicación de medidas de embargo, conforme a comunicación dirigida al Juzgado cuarto (SIC) Laboral del Circuito de Descongestión para Procesos Ejecutivos de Medellín, la cual es de público conocimiento, (…)*”

La cognoscente de instancia concedió la apelación a través de providencia del 2 de septiembre de 2022 (doc. 25).

El auto recurrido es apelable en virtud del numeral 7º del artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, reformado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001, razón por la que procederá la Sala al estudio del caso.

PROBLEMA JURÍDICO

El punto nuclear en la presente Litis se contrae a determinar ¿Es viable decretar el embargo de los dineros que posee COLPENSIONES en cuentas bancarias, para efectos de garantizar el pago de mesadas pensionales e indexación?

CONSIDERACIONES

En cuanto a la medida cautelar de embargo de los dineros de Colpensiones, es preciso relieves que el artículo 134 de la Ley 100 de 1993 dispuso que son inembargables “(...) *2. Los recursos de los fondos de reparto del régimen de prima media con prestación definida y sus respectivas reservas (...)*”, al tiempo que el artículo 594 del Código General del Proceso dispuso que “*Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:* *1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social. (...)*”.

Con todo, atendiendo a los predicamentos de la Corte Constitucional, este mandato legal no es absoluto y debe excepcionarse cuando quiera que se vean comprometidos derechos fundamentales de los pensionados, tales como la vida digna, la seguridad social y el acceso a la administración de justicia, cuando lo que se pretende es el pago de acreencias de carácter laboral o pensional. En este sentido, adoctrinó la Corte Constitucional desde la sentencia C-263 de 1994, que:

“El principio de inembargabilidad no puede llevarse al extremo de desconocer las obligaciones contraídas por el Estado en materia laboral, según ya lo destacó la Corte en sus fallos C-546 del 1º de octubre de 1992, C-337 del 19 de agosto de 1993 y C-103 del 10 de marzo de 1994, entre otros”.

Igualmente, en la sentencia C-1154 de 2008, refiriéndose a los recursos públicos incorporados al Presupuesto General de la Nación, recogió tres excepciones a la regla

general de inembargabilidad, las cuales es procedente traer a colación dada la característica común de inembargabilidad que comparten los recursos del Presupuesto General de la Nación y los recursos del Sistema de Seguridad Social, conforme lo dispone el artículo 594 del CGP, a saber:

“(...) el Legislador ha adoptado como regla general la inembargabilidad de los recursos públicos consagrados en el Presupuesto General de la Nación. Pero ante la necesidad de armonizar esa cláusula con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción, pues no puede perderse de vista que el postulado de la prevalencia del interés general también comprende el deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada.

4.3.1.- La primera excepción tiene que ver con la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Al respecto, en la Sentencia C-546 de 1992, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 16 de la Ley 38 de 1989 (inembargabilidad de rentas y recursos del Presupuesto General de la Nación), en el entendido de que “en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la nación, este será embargable en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo”.

(...)

La segunda regla de excepción tiene que ver con el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias. Así fue declarado desde la Sentencia C-354 de 1997, donde la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 19 del Decreto 111 de 1996 (inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación), “bajo el entendido de que los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se

trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos”

(...)

Finalmente, la tercera excepción a la cláusula de inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, se origina en los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible. En la Sentencia C-103 de 1994 la Corte declaró la constitucionalidad condicionada de varias normas del Código de Procedimiento Civil relativas a la ejecución contra entidades de derecho público y la inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación.” (Subrayas propias de la Sala)

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, en torno de la excepción a la regla general de inembargabilidad ha establecido reiteradamente que:

*“Debe advertirse que tales reflexiones lucen contradictorias pues, como claramente lo indicó la Colegiatura, **el derecho reclamado por vía de ejecución forzada, también es pensional, y por ende, los pagos que de él se deriven**, deben gozar de igual grado de importancia y prevalencia que para el resto de jubilados a quienes las accionadas buscan blindar.*

Aunado a lo dicho, debe entenderse que la inhibición en el decreto de las cautelas por la loable causa de preservar los dineros destinados al pago de pensiones al grueso de jubilados de nuestro país, a la postre constituye un patrocinio a la indolencia y el desorden administrativo de la entidad, quien por la tesis de inembargabilidad no se ve constreñida a cumplir los mandatos Constitucionales y legales que le han sido impuestos”. (STL 10627-2014 reiterada por SLT 4212-2015, STL 18606-2016 y STL 14429-2019; negrillas de la Sala).

Ahora bien, en el *sub lite*, es claro que mediante auto de del 15 de enero de 2019 el juzgado de conocimiento libró mandamiento de pago por: “(...) las mesadas pensionales causadas a partir del 1 de septiembre de 2013, junto con los incrementos de Ley que se generen hasta la fecha de su pago”; por “(...) las mesadas adicionales (de diciembre) causadas a partir del año 2013, hasta la fecha de pago de la pensión”; y por la indexación de tales mesadas (doc. 01 pág. 195 y ss.); de suerte tal, que se trata de obligaciones por mesadas pensionales, y por la indexación de éstas, la que

debe correr con la misma suerte de aquellas y, por tanto, para su pago efectivo habrá de aplicarse la excepción a la inembargabilidad de los recursos de COLPENSIONES.

Viene a propósito traer a colación los predicamentos del H. Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, en la sentencia de tutela del 10 de junio de 2021, radicado 11001-03-15-000-2020-04268-01(AC), en la que en caso similar dispuso:

“En el presente asunto, la accionante reprocha las providencias de 13 de septiembre de 2019 y 2 de julio de 2020 mediante las cuales el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, respectivamente, le negó la medida cautelar de embargo solicitada con el fin de garantizar el pago de los intereses moratorios derivados de la sentencia de 10 de marzo de 2011 a través de la cual se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación, porque, en su entender, con dichas providencias se desconoció la jurisprudencia constitucional que ha determinado la posibilidad de garantizar el pago efectivo de una condena derivada de una sentencia judicial a través de una medida cautelar de embargo. (...) la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca obedeció, únicamente, al análisis de los artículos 593 y 594 del Código General del Proceso, a partir de lo cual precisó la imposibilidad de decretar medidas de embargo sobre recursos provenientes del presupuesto general de la Nación, y concluyó que el pago de las sentencias está garantizado a través de los rubros destinados en cada vigencia presupuestal. No obstante, desconoció que dicha regla general ha sido objeto de reiterados pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional en las sentencias referidas en el acápite precedente, en las que se han establecido ciertas excepciones, precisamente con miras a acompañar el principio de inembargabilidad de recursos públicos con la garantía y vigencia de los derechos fundamentales. Así las cosas, es claro para la Sala que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en desconocimiento del precedente constitucional relacionado con las excepciones al principio de inembargabilidad de recursos públicos, lo que, como bien lo señaló la Sección Cuarta de esta corporación, vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de la accionante, en tanto se insiste, no realizó consideración alguna sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia.”

Ello así, es menester señalar que a más de que la indexación es una obligación consiguiente al reconocimiento del derecho pensional, del que obtiene su fundabilidad, deben seguir su misma suerte con la aplicación de la excepción de inembargabilidad, y por ende, con la imposición de las medidas cautelares decretadas en el trámite del proceso ejecutivo.

En adición, para dirimir el presente caso, debe tenerse en cuenta la excepción segunda aupada por la Corte Constitucional en la sentencia C-1154 de 2008, pues se trata de *“el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias”*; debiéndose por tanto asegurar la efectividad de derechos fundamentales y el acceso efectivo a la administración de justicia.

Consecuente con lo anterior, habrá de inaplicarse en el presente caso, la regla general de inembargabilidad y, por tanto, sin más puntos de apelación por resolver, surge imperativo el deber para la Sala de revocar la decisión confutada de fecha 29 de agosto de 2022, para en su lugar, decretar la medidas cautelares deprecada, consistente en el embargo o retención de dineros depositados en la cuenta de ahorros referida por el ejecutante, más no el secuestro de los mismos que posee COLPENSIONES, debiéndose señalar que la *a quo* indicará como cuantía máxima de la medida una suma que no exceda el monto de la liquidación del crédito vigente, para lo cual, la cognoscente de instancia expedirá el respectivo oficio a la entidad financiera, dejando salvo, bajo esos mismos presupuestos, la posibilidad a la *a quo* de decretar la misma medida cautelar a otras cuentas de ahorro de la entidad accionada, de ser necesario.

4. COSTAS

Sin costas en esta instancia, por haber prosperado el recurso de apelación.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN, Sala Quinta de Decisión Laboral,**

5. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR íntegramente el proveído de fecha 29 de agosto de 2022, proferido por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL promovido por NANCY PETRONA PACHECO PÉREZ en

contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, para en su lugar, **DECRETAR** el embargo de los dineros que posee COLPENSIONES en la “Cuenta de Ahorros No 65283208570 de Bancolombia – Medellín”, en cuantía máxima que no supere el monto de la liquidación del crédito vigente, según y conforme al parte considerativa de este proveído.

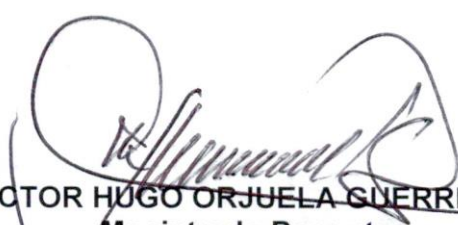
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo 41 del CPTSS.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.


Comuníquese, notifíquese y cúmplase



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

Certifico: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS n.º 27** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8:00 a.m.
Medellín, 17 de febrero de 2022

Secretario